exactamente como los demás miembros del consejo de vigilancia que representan, a diferencia de los primeros, exclusivamente los intereses de aquélla. El autor argumenta para demostrar que el proyecto de estatuto de sociedades anónimas europeas ha considerado el tipo de consejo de vigilancia —proveniente del derecho alemán— menos favorable a los trabajadores, inconveniente para aquellos Estados miembros que disponen de un órgano análogo (Francia, por ejemplo).

La idea —proveniente del derecho alemán— de un director encargado de los problemas del personal y de las relaciones de trabajo, ha sido propuesta para el problema que aborda el presente artículo. El autor la considera inadecuada en su formulación comunitaria, puesto que este director no es responsable respecto al personal.

El proyecto propone la consultación —modalidad privilegiada de la participación institucional en la mayoría de los Estados miembros— para las decisiones económicas importantes en la empresa. La codecisión está reservada a las cuestiones sociales, consecuencia de las económicas (contratación, promoción, despido, remuneración, vacaciones, obras sociales y medidas de seguridad, salubridad e higiene). Pero tales decisiones (tomadas a nivel comunitario) podrían contradecir las disposiciones de la ley nacional, y también aquéllas deben ser armonizadas en los diferentes establecimientos para evitar desigualdades indeseables. El proyecto de estatuto de sociedades anónimas europeas no aclara, en estos casos, el procedimiento a seguir.

El investigador de la Universidad de Bruselas concluye:

- el proyecto de estatuto está lejos de acordar a los trabajadores derechos equivalentes a los del capital;
- el proyecto concibe a la empresa de manera capitalista: el fin esencial es obtener el rendimiento económico más elevado;
- aun cuando pretende sostener la teoría de la empresa como comunidad, el no otorgar a los trabajadores los medios jurídicos suficientes, la convierte en mera fachada;
- descuida la convención colectiva, la forma más eficaz y flexible de la participación, tal como lo demuestran las experiencias de cada Estado miembro;
- la participación automática del sindicato en el consejo de vigilancia es criticable desde el momento en que los representantes sindicales son responsables sólo frente a la sociedad.—Ignacio CARRILLO PRJETO.

OPPETIT. *Le 'trust' dans le droit du commerce international*. v. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.

DERECHO PENAL

ANDREANI. *Recenti sviluppi normativi internazionali...* v. DERECHO MERCANTIL.

PARADA VÁZQUEZ. *El Poder sancionador de la Administración y la crisis del sistema judicial penal*. v. DERECHO ADMINISTRATIVO.

PUGLIESE. *Le garanzie dell'imputato nella storia del processo penale romano*.
V. DERECHO PROCESAL.

TEH, G. L. *Detention for Interrogation*, "Melbourne University Law Review",
vol. 9, núm. 1, 1973, pp. 11-41. Melbourne, Australia.

En el artículo que se reseña, G. L. Teh —*Lecturer in Law* en la Monash University— examina las diversas hipótesis en que, dentro del enjuiciamiento criminal, la detención e interrogatorio de un sospechoso, por parte de la policía, pueden considerarse como legales. A tal fin, se preocupa por aclarar tres diversos presupuestos que condicionan, en su opinión, la calificación jurídica de la detención y el interrogatorio como conformes a derechos. Tales presupuestos son la determinación del momento en que una detención se convierte en ilegal (*unlawful*), los límites temporales a que debe sujetarse toda detención legal y, finalmente, la ilegalidad que implica la detención *on a holding charge*, esto es, aquella en que los motivos que originan la detención —y eventualmente el interrogatorio— no guardan una relación directa con las preguntas a que viene sometido el detenido.

A lo largo de todo el artículo, Teh se preocupa no sólo por delinear un determinado sistema normativo, sino, sobre todo, por poner de manifiesto las raíces ideológicas y las directivas de política criminal subyacentes al problema de la detención. Teh considera que el sistema vigente en Australia en materia de detención policiaca contiene un excesivo número de restricciones a las actividades de la policía, con lo que la investigación delictiva es a menudo lenta. Sin proponer una restricción a las garantías del indiciado, el autor considera que dentro de la sociedad australiana convendría inclinarse por la formación de normas elásticas que permitan a la policía una mayor discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. Propone, igualmente, la creación de normas destinadas a originar un espíritu de colaboración y *fair play* entre el detenido y las autoridades.

Falta en el trabajo reseñado un estudio, siquiera somero, de la relevancia probatoria de los hechos conocidos por la policía durante interrogatorios "ilegales": materia que es, como es sabido, uno de los puntos cardinales sobre los que debe girar un examen de los interrogatorios contrarios a derecho.—Santiago OÑATE.

DERECHO PROCESAL

ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. *Notas relativas al concepto de jurisdicción*.
"Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", núms. 2-3, 1972, pp. 477-509,
Madrid, España.

Con su habitual maestría, el insigne procesalista español, aborda en pocas páginas, pero profusamente documentadas, una serie de problemas relativos a la jurisdicción sobre la que tanto se ha escrito desde los más diversos ángulos, pero sin haberse logrado una delimitación precisa.

En su profundo planteamiento del tema, el profesor Alcalá-Zamora, señala los cuatro aspectos esenciales desde los cuales se puede examinar la jurisdicción.